

El paso del movimiento indio y Pachakutik por el poder

Franklin Ramírez Gallegos*

* *Sociólogo.*
Centro de Investigaciones
CIUDAD, Quito, Ecuador.

Con la salida de Pachakutik del gobierno termina un primer momento político de presencia indígena en el gobierno nacional. A excepción de las tres horas del 21 de enero de 2000, cuando sectores indígenas respaldados por un puñado de coroneles liderados por el actual Presidente Lucio Gutiérrez derrocaron a Jamil Mahuad, el movimiento indígena nunca había ocupado tal esfera de poder. Permanente opositor de los gobiernos de turno y de las políticas de ajuste estructural llevadas a cabo desde mediados de los ochenta, bajo la dirección de líderes formados en los antiguos partidos de izquierda, en las comunidades eclesiales de base y en diversos procesos auto-organizativos, el movimiento deberá concretar un profundo proceso de autocrítica que derive en un reacomodo de sus instancias organizativas a fin de dar cuenta de las nuevas exigencias que ha ocasionado su paso por el gobierno, y de responder a las altas expectativas que generó en amplios sectores sociales y organizaciones populares. Este texto busca, precisamente, dar cuenta

[ANNO IV N° 11 MAYO-AGOSTO 2003]

OSAL41

del recorrido del movimiento en la alianza electoral, de las posteriores vicisitudes en las funciones gubernamentales, y de los dilemas político-programáticos que llevaron a la ruptura definitiva de la alianza. Finalmente se ensaya una reflexión sobre los desafíos inmediatos que el movimiento deberá resolver.

El campo de alianzas y las elecciones presidenciales

La sorpresiva victoria de la alianza entre indígenas, sectores de izquierda y ex militares en la primera vuelta de las elecciones de 2002 con apenas el 20,64% de los votos válidos refleja la profunda segmentación política del país. La división de la centroizquierda y la dispersión de los sufragios sobre todo en el voto costeño¹ posibilitaron un triunfo con el porcentaje de votación más bajo con que candidato alguno haya pasado a la segunda vuelta desde el retorno democrático de 1979². La coalición indígena-militar llegó al poder en la segunda vuelta de octubre de 2002, un poco menos de tres años después de su rebelión, derrotando al bananero Álvaro Noboa, que pretendía hacer del Ecuador una gran zona franca ultraliberal.

La expectativa política fue enorme. Las fuerzas tradicionales veían con asombro y miedo cómo indios, militares progresistas y militantes de izquierda llegaban al poder por primera vez en la historia de la república. En el campo popular y en otros sectores progresistas —aún cuando se veía con reservas la alianza *contra natura* con ex militares— se visualizaba la posibilidad de un cambio que apuntara más allá de las políticas de ajuste y que democratizara el desenvolvimiento del Estado. Ante la opinión pública, Pachakutik se presentaba como la reserva moral de la alianza y, más aún, como la fuerza capaz de imprimir coherencia programática al proceso de gobierno.

El arribo al poder fue, en cualquier caso, inesperado para los dos sectores fuertes de la coalición. Ninguno de los dos imaginaba antes del 20 de octubre que sus pretensiones políticas se concretarían tan pronto. Los desafíos de gobernar los encontraban con agendas en plena formación: el paso de una alianza electoral a una alianza de gobierno presentaba enormes incertidumbres.

¿Alianza de gobierno?

Ni bien llegado al poder, Gutiérrez optó por despejar las dudas y miedos que su campaña había abierto en diversos círculos políticos. Conversó con el FMI, viajó a Estados Unidos donde se presentó como el “mejor aliado posible” del gobierno norteamericano, nombró como ministro de Economía a un economista neoliberal ortodoxo muy afín a

grupos bancarios y productivos de la sierra, y estructuró su gabinete con un reducido número de ministros provenientes de Pachakutik.

Cuatro decisiones presidenciales perturbaron la estabilidad de la alianza. En primer lugar, la formación de un gabinete ministerial que dejaba en un rol claramente secundario, y alejado de los puntos clave de decisión, a los representantes del movimiento indio. Gutiérrez prefirió optar por personajes cercanos a su círculo militar y a sectores bancarios y productivos del país para los ministerios “duros”. Apenas una muy custodiada ministra de Relaciones Internacionales –Nina Pacari, líder histórica del movimiento– figuró entre las aportaciones de Pachakutik al manejo de los sectores estratégicos del país. La estructura institucional para apuntalar el co-gobierno aparecía, de partida, desdibujada.

En segundo término, las decisiones de política económica, avaladas por los acuerdos con el FMI, continuaban con el uso de la política fiscal como el único mecanismo de ajuste en una economía dolarizada. Además de ello se decretó el alza de los precios de las gasolinas y de los servicios públicos. Aun cuando tales medidas elevaron la credibilidad del Presidente ante el mercado internacional y las élites locales, el movimiento se mostró incómodo con la agenda económica y bloqueó el alza del precio del gas, símbolo de la lucha indígena de los '90, que sería una de las más importantes condiciones del FMI no procesadas. Para las bases del movimiento, para grandes sectores de la población y para ciertos partidos de centro, tal agenda significó el fin de la posibilidad de armar una “agenda post-consenso de Washington”, de pagar la enorme “deuda social” a los sectores excluidos, y un paso atrás en las promesas de campaña.

Las contradicciones de la política exterior, que han ido desde un abrupto alineamiento del nuevo Presidente con los Estados Unidos en su política anti-narcóticos derivada del Plan Colombia, hasta la presencia de la canciller en la Cumbre de los Países No-Alienados donde Ecuador se pronunció a favor de una solución pacífica, negociada y multilateral del conflicto iraquí o la negativa de Cancillería de firmar un acuerdo de excepción de juicios a militares norteamericanos ante la Corte Penal Internacional (CPI), evidenciaron de modo recurrente las fracturas y diferencias programáticas entre sus dos fuerzas constitutivas. Las declaraciones del Presidente en que se ofrecía como mediador entre el gobierno colombiano y las FARC, y posteriormente aquellas en las que invocaba una mayor participación de la ONU en el conflicto, dejaron fuera de lugar a Relaciones Exteriores y aceleraron el desgaste del discurso de Pachakutik acerca del no involucramiento ecuatoriano en el conflicto del vecino país.

Finalmente, la comprensión familística y clientelar de la política de Gutiérrez y su círculo, sumadas a prácticas de “inteligencia militar” en la administración pública, nada tenían que ver con la visión más horizontal y comunicativa de los militantes del movimiento.

Así, luego de los cien primeros días de gobierno parecía evidente que los acuerdos programáticos que hicieron posible la coalición fueron olvidados.

Los aportes del movimiento

En este escenario, y aún reconociendo su marginalidad en el gobierno, Pachakutik buscó posicionarse desde los estrechos márgenes de maniobra que le otorgaban las instancias de gestión gubernamental que controló. En un principio fueron cuatro ministerios: Agricultura, Relaciones Exteriores, Educación y Turismo y algunas secretarías.

En el marco de cooperación global entre las dos fuerzas gobernantes se sitúa como un logro, acorde con los acuerdos programáticos, la voluntad política para consolidar las empresas públicas en ciertos sectores estratégicos (generación hidroeléctrica y la telefonía celular) que en la última década empezaban a ser controlados únicamente por sectores privados transnacionales³.

En el campo específico de las áreas controladas desde Pachakutik se destaca nítidamente la devolución, desde la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), de los fondos retenidos a los ahorristas nacionales desde el salvataje bancario de 1999. Luego de tres años de gestiones oscuras en que el Estado no ha conseguido recuperar las deudas de poderosos grupos privados, y más bien ha favorecido su progresivo vencimiento, la nueva administración ha emprendido una firme política de presión sobre los deudores privados –que incluye incautaciones– y empezó a devolver los recursos a los ahorristas en una recuperación de la soberanía estatal sobre las élites deudoras.

En las demás instancias de gobierno la marca particular del movimiento fue una lógica de gestión asentada sobre la base del diálogo abierto, la participación ciudadana, y la búsqueda de consensos entre una diversidad de actores sociales y las agencias gubernamentales. Tal política de

“La expectativa política fue enorme. Las fuerzas tradicionales veían con asombro y miedo cómo indios, militares progresistas y militantes de izquierda llegaban al poder por primera vez en la historia de la república”.

concertación se plasmó sobre todo en la activación de un fondo de reactivación productiva para la agricultura y la ganadería y en la campaña masiva de titulación de tierras promovida por Luis Macas, líder histórico del movimiento, desde el Ministerio del área. Algo similar sucedió con la agenda educativa.

La sumatoria de estas iniciativas políticas, no obstante, nunca alcanzó para posicionar una nítida agenda programática dentro de la coalición. No alcanzó tampoco para men-
guar el claro corte fondomonetarista y pro-estadounidense del Presidente. El deterioro de la coalición se acrecentaba así vertiginosamente.

Las críticas a las decisiones presidenciales por parte de algunos miembros del movimiento empezaron a multiplicarse, produciendo algo a todas luces inédito e incom-
prendible para la opinión pública oficial: la combinación de tareas de gobierno y discursos de resistencia y contestación desde el interior de la estructura del poder estatal. Tal tensión política carecía de las instancias adecuadas para procesarse al interior del régimen. Los límites del modelo presidencialista para soportar gobiernos de coalición se hacían más latentes a medida que el Presidente se encerraba en su círculo íntimo para tomar las decisiones claves. La demanda de los dirigentes del movimiento para abrir espacios explícitos de co-gobierno nunca estuvo en la agenda presidencial. Era evidente que en estas circunstancias las denuncias, disputas y tensiones empezaran a producirse desde el dominio público mediático, con el consecuente rápido enturbiamiento de las relaciones entre el movimiento indio y el régimen.

La realpolitik gutierrista

La fragilidad de la coalición a nivel del poder ejecutivo generó también una desacertada política de alianzas con los principales bloques políticos del Parlamento, con el obvio deterioro de la presencia de la alianza en las principales instituciones del Estado. Prácticamente no hubo coordinación política entre el ejecutivo y el bloque de diputados de la alianza, lo que condujo a que cada partido optara por estrategias y acercamientos diversos e incluso antagonicos. Precisamente, otro punto de fricción al interior de la coalición surgió en torno al evidente acercamiento del Presidente Gutiérrez hacia el derechista y mayoritario Partido Social Cristiano (PSC). Acuerdos legislativos entre éste y el partido de gobierno, y respaldo político en complejos asuntos estatales, dejaron ver la nueva base de apoyo político que construía el régimen.

Aún en este escenario, el conflicto social se mantuvo represado en el marco de la presencia gubernamental del movimiento, con lo cual su "estrategia dual" de una política a la vez institucional y extra-institucional entró en crisis. Protestas de carácter corporativo

de parte del gremio de educadores públicos y los sindicatos de trabajadores petroleros, si bien evidenciaron la escasa capacidad de negociación del régimen, no articularon otras dinámicas organizativas populares.

Sin embargo, tal conflicto petrolero decantó con nitidez las distancias de fondo y forma que separaron desde siempre a las dos fuerzas coaligadas. Mientras Pachakutik, con su representante ante el Consejo Administrativo de Petroecuador, promovía una política petrolera de corte nacionalista enfatizando en alianzas estratégicas a nivel regional con Petróleos de Venezuela, por ejemplo, el Presidente y su ministro de Energía levantaban acciones para favorecer una mayor apertura del sector hacia las empresas transnacionales y emprendían una violenta persecución de los líderes sindicales en huelga. Finalmente se decretó el despido de todo el Consejo Administrativo, se creó un nuevo espacio de dirección de la política petrolera al que el movimiento ya no tenía acceso, y se encarceló y despidió a algunos dirigentes. El corolario de este evento fue la renuncia de Virgilio Hernández, alto dirigente de Pachakutik y hasta ese momento subsecretario de gobierno, quien dimitió a su cargo denunciando las prácticas represivas y las maniobras de inteligencia militar con que el gobierno enfrentó el conflicto.

Las relaciones del Presidente con la CONAIE y las organizaciones indias, mientras tanto, han sido de modo permanente "ambiguamente clientelares". Si por un lado se han negociado directamente puestos y designaciones para una serie de dirigentes medios en diversos órganos estatales, por el otro se ha abierto una política de cooptación directa de algunos sectores del movimiento por la vía de la creación de una nueva federación india dirigida desde el ejecutivo y encargada de organizar las visitas presidenciales a las distintas comunidades con el fin de entregar picos, palas y alimentos a los comuneros.

Estas prácticas, que contribuyeron a subir la tensión en las relaciones entre sectores de la CONAIE y Pachakutik, fueron denunciadas como el regreso a una política social benefactora e hicieron evidente la voluntad del gobierno de penetrar y quebrar al movimiento.

El fin de la coalición

Mientras la correa de decisiones gubernamentales continuaba cerrándose para el movimiento, Gutiérrez, apuntalado en el acercamiento con la derecha y en una cierta estabilización económica producida por el acuerdo con el FMI, lanzó una ofensiva hacia Pachakutik evidenciando que podía prescindir de su presencia. En una evidente toma de fuerza y presión sobre sus aliados, amenazó con destituir inmediatamente a todo funcionario que se pronunciara en contra del gobierno por fuera del marco establecido en la alianza. Así lo hizo con la ministra de Educación luego de supuestas desafiantes decla-

raciones en contra del régimen. Este despido activó un sentido de cuerpo dentro del movimiento ante lo que veían como un agravio del Presidente y como una avanzada sobre sus espacios de poder. La ruptura de la alianza parecía así cuestión de días.



El carácter descentralizado y comunitario del movimiento obligó a que antes

de cualquier decisión se produjera un proceso de consultas internas sobre la pertinencia de proseguir en el gobierno. Paradójicamente, el *timing* requerido para un proceso tal de toma de decisiones no se ajusta con las velocidades de la política estatal, y daría la impresión de poder operar en contra del establecimiento de una posición cohesionada del movimiento. Cuando algunos sectores parecían reconsiderar la decisión de romper la alianza y se hacía evidente que cualquier decisión terminaría por profundizar las fracturas y distanciamientos al interior del movimiento, el Parlamento rechazó, con los votos de la mayoría de diputados de Pachakutik, un urgente proyecto económico que formaba parte de los acuerdos del régimen con el FMI⁴. Un día antes el Presidente había amenazado a sus aliados con removerlos de sus funciones en caso de que su bloque de diputados no votase con el gobierno. Así fue: el bloque legislativo, en una señal de coherencia ideológica, vetó el proyecto de ley y Gutiérrez inmediatamente solicitó la renuncia de ministros y demás funcionarios del movimiento. Acto seguido la CONAIE desconoció el respaldo al régimen y Pachakutik puso fin a su presencia gubernamental. La alianza concluía así luego de menos de siete meses de instaurado el gobierno, del 15 de enero al 6 de agosto de 2003, dejando al régimen en posición de extrema fragilidad política y al movimiento en libertad de reactivar todo su juego.

El movimiento indio, Pachakutik y otras organizaciones sociales y de izquierda del país pasaron así de la posibilidad de disputar la hegemonía dentro del proceso político al mantenimiento de ciertos márgenes de maniobra desde específicos ámbitos de la gestión pública, la cual se vio entrampada en la posterior dinámica de exacerbamiento de la conflictividad con el régimen hasta producir la definitiva ruptura. En medio de tales desplazamientos quedó el interrogante, en la escena pública, de la solidez programática del movimiento: incluso se ha puesto en duda la existencia de una agenda alternativa, plurinacional y/o de izquierdas, para gobernar.

¿Recomposición social con autoritarismo?

La salida de Pachakutik de la alianza instala al gobierno en la incertidumbre. La siempre volátil cercanía al PSC no le garantiza ni una colaboración íntegra en el manejo de su agenda de gobierno en el legislativo, ni la lealtad de las cámaras empresariales de la costa con las que ya ha tenido algunos enfrentamientos. Dados su alejamiento de otros bloques y su deficitaria capacidad de gestión, sus recursos de poder se avizoran por demás estrechos frente al desafío de cumplir los compromisos con el FMI. Tales acuerdos enfrentarán paulatinamente un cierto nivel de conflictividad social que, ante la fragilidad de las coaliciones políticas del régimen y ante la pérdida de la base social que lo llevó al poder, derivaría en brotes autoritarios estimulados por la extensa militarización de la administración pública.

A Gutiérrez le queda continuar acercándose a la solución violenta del conflicto colombiano de parte del Presidente Uribe (quien apenas defenestrada la ex ministra Pacari visitó oficialmente Quito en una clara muestra de su afán por garantizarse el apoyo político-militar del Ecuador) si quiere mantener el apoyo de Washington. No es tan claro, sin embargo, el nivel de respaldo que tal tesis tiene al interior de las Fuerzas Armadas. Tal apoyo evidenciaría no sólo el futuro del involucramiento ecuatoriano en el conflicto colombiano, sino el nivel de sustento que el Presidente tiene en un sector militar que, por primera vez desde el retorno democrático de 1979, ve cómo los niveles de confianza en la institución se han deteriorado casi concomitantemente con los del poder ejecutivo.

El fin de la alianza no ha supuesto, por otro lado, la discontinuidad de la política clientelar del Presidente con respecto a diversos sectores del movimiento indio. A esta maniobra se añade esta vez el despliegue de una lectura en la que los sectores blanco-mestizos del movimiento aparecen como los culpables de la ruptura, mientras que los líderes indígenas aparecen como polí-

“La alianza concluía así luego de menos de siete meses de instaurado el gobierno [...] dejando al régimen en posición de extrema fragilidad política y al movimiento en libertad de reactivar todo su juego”.

ticos leales. La continuidad de ciertas organizaciones amazónicas en el gobierno refuerza ante la opinión pública este argumento.

Aunque el discurso oficial abriga una óptica racista y tiene intenciones de fragmentar al movimiento, no cabe negar que recoge algo de las continuas y no procesadas tensiones entre la CONAIE y Pachakutik durante los días de la alianza. Tal fue su debilidad principal mientras hacía el juego gubernamental, y tal es su desafío si aún pretende jugar un papel preponderante como actor político nacional.

El carácter inestable, ambiguo y escasamente formalizado de las relaciones entre CONAIE y Pachakutik derivó en gaseosos mecanismos de coordinación de su acción colectiva y debilitó su capacidad de acumular y articular recursos para las cruciales negociaciones políticas que debieron enfrentar. Los efectos de tal desajuste organizacional, visible mucho antes de la experiencia gubernamental, pesaron mucho en una coyuntura que exigía velocidad y precisión para concretar acuerdos y tomar decisiones, y en la que sus "aliados" contaban con el más importante recurso de poder del que se puede disponer en un sistema presidencialista: el Presidente.

La descoordinación colectiva del movimiento en los "días de gobierno" se hizo evidente, por ejemplo, en las tremendas dificultades que tuvo para recomponer la dirección política a raíz de la designación de sus principales dirigentes en cargos públicos: el carácter colegiado de su dirección, único entre los "partidos de caudillos" dominantes en el medio, entró en una franca crisis. De igual modo se observaron disímiles mecanismos y propósitos de acceso al circuito presidencial y su botín clientelar, a tal punto que es ya recurrente su representación como un nuevo actor corporativo y adscrito a las convencionales prácticas paternalistas del Estado (de la Torre, 2003; León, 1997).

El problema, sin embargo, no es sólo "formal". La incorporación estatal de la organización indígena atenta contra la continuidad de la estrategia dual, y se levanta como un dispositivo de control político para distanciar "lo indio" de lo "no indio", reduciendo así el eco de la conflictividad social. En efecto, al construir un andamiaje institucional específicamente diseñado para satisfacer las demandas particulares del movimiento en tanto principal protagonista de la conflictividad social, se niega el margen de universalidad de sus demandas y se provoca un efecto de "etnificación" o "racialización" de la protesta que aparece como restrictivo de su potencial articulación con otros sectores (Ramírez Gallegos, 2001).

Como correlato, en los últimos años se ha reactivado un discurso indigenista en un buen sector del Movimiento. Tres factores han incidido en ello: el debilitamiento de la Coordinadora de Movimientos Sociales, instancia que agrupaba a organizaciones urba-



nas, sindicales, de mujeres, etc., y la debilidad de los contrapesos organizativos no indígenas; los éxitos electorales locales en zonas especialmente indígenas que, aun cuando aportan poco en la votación nacional, son suficientes para acceder a cargos locales; y la diversificación de las corrientes político-

ideológicas al interior del movimiento indígena que encuentra su unidad sobre todo recurriendo a un discurso étnico (Barrera, 2002).

Esta tendencia obliga a resolver un asunto de vital importancia hasta ahora postergado: ¿Pachakutik representa un movimiento de izquierda plurinacional de nuevo tipo, o es la extensión política de la CONAIE?

Enfrentar los dilemas organizativos resulta así apremiante. En tal definición se podrán resolver en gran parte los dilemas de la unidad del movimiento, esto es, superar la aparente disyuntiva entre el movimiento social y el movimiento político⁵ y la falaz oposición entre una agenda étnica y una agenda ciudadana dentro de sus militantes; evitar la continuidad del uso abierto o solapado de la “espada de Damocles” de la inautenticidad étnica como método de chantaje político; y traducir y diversificar la capacidad de protesta social en un efectivo capital militante, institucional, organizativo que sofistique y eleve las capacidades de gestión política del bloque político en su conjunto.

De ahí que la continuidad del proceso político abierto por los indígenas hace más de una década reposa en su capacidad para responder a su, ahora sí, definitiva proyección como actor con incidencia en el nivel nacional. Antes de su paso por el gobierno, amplios sectores de la costa del país apenas si reconocían al movimiento indio y a sus principales dirigentes como actores beligerantes en el sistema de poder serrano. Ello implica un específico trabajo de elaboración concertada de una base programática que vaya más allá de la oposición al modelo económico vigente; un coherente trabajo organizativo que permita incorporar las diversas iniciativas ciudadanas formadas o en formación bajo su estímulo en todo el territorio nacional; un claro lineamiento que permita ensayar otras articulaciones políticas y distinguir dentro del campo adversario posibles nuevos aliados; y finalmente, la adhesión sin ambigüedades a la

democracia como un desafío estratégico que constituiría un salto cualitativo del movimiento indio y la izquierda para su contribución a la plena democratización de la sociedad ecuatoriana⁶.

La voluntad de romper con los modelos verticalistas y vanguardistas de la vieja izquierda jugó un papel legítimo y positivo en las modalidades de construcción de Pachakutik. Sin embargo, se llame partido o movimiento, la organización política no puede concebirse sino como un intelectual colectivo en construcción permanente, dotado de una capacidad de acción y de elaboración propia. No se puede limitar a reflejar las aspiraciones más o menos definidas y los inevitables juegos de intereses que brotan del conflictivo movimiento social.

Que, a diferencia de los partidos tradicionales posea mecanismos de recambio y de formación de cuadros y metodologías rigurosas de rendición de cuentas y de control de los mandatos, es imprescindible. Pero se trata de un asunto de creatividad democrática y de ingeniería institucional a procesarse en el devenir político de las luchas y en la experimentación colectiva en una serie de espacios sociales no siempre coincidentes (Saint Upéry y Ramírez, 2003).

Bibliografía

Barrera, Augusto 2002 *La reconstrucción de la izquierda en el Ecuador* (Campinas-Brasil) mimeo. Ponencia presentada en Coloquio sobre la Izquierda en América Latina, organizado por CLACSO.

de la Torre, Carlos 2003 "Movimientos étnicos y cultura política en el Ecuador", en *Iconos* (Quito: FLACSO) N° 15.

Henriquez Luis S. 2003 <www.lainsignia.org>.

León, Jorge 1997 "Entre la propuesta y el corporalismo", en *Iconos* (Quito: FLACSO) N° 2.

MUPP-NP Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País 2003 "Evaluación de los 100 días", en *Documentos de Análisis de Coyuntura* <<http://www.pachakutik.org.ec>>.

Ramírez Gallegos, Franklin 2001 "Las paradojas de la cuestión indígena", en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 176.

Saint Upéry, M. y Ramírez, F. 2003 "De runas y rayas", en *Semanario Tintají* (Quito).

Notas

1 Hubo cuatro candidatos guayaquileños, Noboa, Roldós, Neira y Bucaram, de los que al menos tres disputaban un espacio populista y/o anti-partido que fue también parte del voto de Gutiérrez.

2 El ex oficial había arrancado con unas intenciones de voto de alrededor del 7%. Finalmente, superó a Álvaro Noboa (17,39%), al socialista independiente León Roldós (15,40%), al ex Presidente Rodrigo Borja (13,97%), al socialcristiano Xavier Neira (12,11%) y al populista Adolfo Bucaram (11,92%).

3 Ver evaluación política de Pachakutik en MUPP-NP (2003).

4 El proyecto establecía el aumento de las horas de trabajo de 40 a 48, facilidades para la remoción de empleados públicos y congelamiento de salarios del sector. En suma, una nueva estructura legal para unos 350.000 burócratas.

5 Numerosos intelectuales y dirigentes dentro del movimiento han planteando que a raíz de la incursión en el ejercicio del poder se habría producido una bifurcación entre el movimiento social indígena, presentado como un actor coherente, prístino e íntegro, y la organización política, vista a su vez como pragmática, realista y contaminada, que terminó por alinear a ésta última con el ejecutivo y llevar al primero a pasar a la oposición. No es éste el espacio para confrontar tal tesis, pero tal y como incluso la salida del gobierno reflejó, las vinculaciones entre ambas instancias son más complejas y profundas, y se soportan en difusas y elaboradas formas de control y contrapeso que no permitirían su mutuo y rápido desanclaje.

6 Luis S. Henríquez (2003) traza una idea similar para el caso brasilero: "el gran eje estratégico del gobierno Lula –independientemente del debate sobre los contenidos de la gestión económica, que debe proseguir con toda legitimidad– estaría en un aspecto sólo aparentemente 'procedimental': la definitiva adhesión de la izquierda a las reglas y comportamientos de la democracia política".